



SENTENCIA

PROCESO	Ordinario laboral
DEMANDANTE	Beatriz Helena Olarte Mejía
DEMANDADO	Protección S.A. y Colpensiones.
RADICADO	05-001-31-05- 002-2018-00859
TEMA	Ineficacia de traslado
DECISIÓN	Revoca, adiciona y confirma sentencia

El veintinueve (29) de abril de dos mil veintiuno (2021), el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL**, integrada por los magistrados **HUGO ALEXÁNDER BEDOYA DÍAZ, CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA** y **GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ**, quien actúa como ponente, previa deliberación del asunto, según consta en el ACTA **090** de discusión de proyectos, procede a dictar sentencia de segunda instancia dentro del proceso ordinario promovido por **BEATRIZ HELENA OLARTE MEJÍA** contra la **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍA PROTECCIÓN S.A.** y la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –COLPENSIONES-**, con radicado **05-001-31-05-002-2018-00859**.

• **RECONOCIMIENTO DE PERSONERÍA:**

En los términos del poder conferido por el doctor FABIO ANDRÉS VALLEJO CHANCI, obrando en calidad de representante legal para procesos de COLPENSIONES de la firma PALACIO CONSULTORES S.A.S., de conformidad con el artículo 75 del Código General del Proceso, el despacho le reconoce personería suficiente para actuar a la Dra. LEIDY JANETH CASTAÑO AVENDAÑO, identificada con cédula de ciudadanía No. 43'926.306, y portadora de la tarjeta profesional N° 271.117 del Consejo Superior de la Judicatura, para que continúe la representación judicial de la entidad hasta su culminación en el presente proceso judicial.

• **PRETENSIONES**

La demandante pretende se declare la ineficacia o en subsidio la nulidad de la afiliación a PROTECCIÓN S.A., y que se tenga como válida, vigente y son solución de continuidad la afiliación a COLPENSIONES. Como consecuencia, que se condene a PROTECCIÓN S.A a trasladar a COLPENSIONES todas las sumas que reposen en la cuenta de ahorro individual, debiendo COLPENSIONES reactivar la afiliación al régimen de prima media y recibir dichas sumas. Y que se condene en costas procesales a las accionadas.

- **HECHOS:**

Como fundamento de las pretensiones indica que nació el 31 de octubre de 1965. Que se afilió al ISS el 1 de noviembre de 1984, en el cual cotizó un total de 522 semanas al 30 de junio de 1992. Que el asesor de PROTECCIÓN S.A. le indicó únicamente cuáles eran todas las ventajas de trasladarse al RAIS y de las desventajas que implicaba seguir en el RPM, sin entrar en más detalles, argumentando también que el ISS se iba a acabar, por lo cual, decidió afiliarse al RAIS a través de PROTECCIÓN S.A. el 14 de diciembre de 1994. Que nunca recibió una reasesoría por parte de la administradora. Que el 29 de octubre de 2018 solicitó a la entidad información respecto a su caso, para obtener una información detallada de sus condiciones en el RAIS para la fecha en que se dio su traslado, a lo cual PROTECCIÓN S.A. responde no tener registros de lo solicitado. Que actualmente cuenta con 1.748,29 semanas cotizadas. Y que el 6 de diciembre de 2018 presentó ante COLPENSIONES formulario de afiliación, el cual fue negado.

- **CONTESTACIONES:**

✓ PROTECCIÓN S.A.:

De acuerdo a los hechos de la demanda manifestó que es cierto que la demandante nació el 31 de octubre de 1965. Que no le consta que la demandante se encontrara afiliada inicialmente al ISS. Que no es cierto que no haya recibido una información clara, completa y suficiente por parte de la entidad, pues sus asesores se encuentran capacitados para brindar este tipo de información, siendo esta clara y acorde al caso particular de la demandante. Que no es cierto que se le manifestara que el ISS se iba a acabar. Que es

cierto que la demandante suscribió formulario de afiliación con PROTECCIÓN S.A. el 14 de diciembre de 1994. Que no es cierto que no se le brindara a la demandante una reasesoría, pues esta tuvo lugar el 17 de octubre de 2012 a través de medios telefónicos. Que es cierto que el 29 de octubre de 2018, la demandante radicó derecho de petición ante PROTECCIÓN S.A.. Y que es cierto que en la actualidad la demandante cuenta con un total de 1.769,86 semanas cotizadas. Se opuso a todas y cada una de las pretensiones y presentó excepciones de mérito.

✓ COLPENSIONES:

Frente a la demanda interpuesta señaló que es cierto que la actora nació el 31 de octubre de 1965. Que no es cierto que esta haya cotizado un total de 522 semanas al ISS, pues las cotizaciones fueron por un total de 374 semanas. Que no le constan las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se dio su traslado al RAIS. Que es cierto que el 6 de diciembre de 2018, la demandante radicó solicitud de afiliación ante COLPENSIONES y esta fue negada. Se opuso a todas y cada una de las pretensiones y presentó excepciones de mérito.

• **SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:**

El 29 de enero de 2020, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín, **DECLARÓ** ineficaz la afiliación efectuada por la demandante a PROTECCIÓN S.A., argumentando que la expresión libre y voluntaria de la elección de régimen pensional exige no cualquier tipo de asesoría, sino aquella que permita el ejercicio de la libertad informada. Que de acuerdo a la línea jurisprudencial de la Corte, las entidades administradoras deben de suministrar al afiliado información cierta, clara, comprensible y oportuna de las características, condiciones, beneficios, diferencias, riesgos y consecuencias de los cambios de régimen pensional. Que el formulario de afiliación suscrito por la demandante no es prueba de una manifestación libre y voluntaria puesto que, para el momento mismo de su creación, les correspondía a las administradoras de fondos de pensiones dar cuenta de que documentaron clara y suficientemente los efectos que acarrea el cambio de régimen. Y que lo que se estudia en el caso concreto no es la presencia de vicios en el

consentimiento sino la falta al deber de información por partes de los fondos privados. Por lo tanto, el acto de afiliación no produjo efectos.

ORDENÓ a PROTECCIÓN S.A. a trasladar a la demandante a COLPENSIONES y además, devolver todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación, tales como cotizaciones completas, bonos pensionales, ahorros voluntarios, sumas adicionales de la aseguradora, con todos sus frutos e intereses, es decir, con los rendimientos que se hubieren causado, con excepción únicamente de los dineros descontados por concepto de cuota de administración, toda vez que si existió una cuenta individual que fue eficientemente manejada.

ORDENÓ a COLPENSIONES a reactivar la afiliación de la demandante sin solución de continuidad y recibir todos los dineros que le sean trasladados por PROTECCIÓN S.A.

DECLARÓ de oficio probada la excepción de inexistencia de la obligación de devolver los dineros por concepto de cuotas de administración de la cuenta de ahorro individual, Y **DECLARÓ** no probada la excepción de prescripción.

Y, **CONDENÓ** en costas a PROTECCIÓN S.A.

- **APELACIÓN:**

- ✓ COLPENSIONES:

La apoderada judicial de Colpensiones presentó su inconformidad en cuanto a la devolución de las cuotas de administración, toda vez que si se busca la declaración de ineficacia del traslado, este tiene como consecuencia que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes del mismo. Por lo anterior, si el acto jurídico nunca tuvo efectos, se debe ordenar el traslado de todos los conceptos que se encontraban en la cuenta de ahorro individual, dentro de los cuales se debe incluir las cuotas de administración.

De igual forma, la presente sentencia será revisada en **GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA** con ocasión de las condenas impuestas a COLPENSIONES.

- **ALEGATOS:**

- ✓ DEMANDANTE

La demandante solicita en sus alegatos se confirme la sentencia de primera instancia, toda vez que dentro del proceso se demostró que no se le suministró una información clara, suficiente y veraz, respecto a las consecuencias legales y económicas que causaría el traslado de régimen, circunstancia tal que derivó en un error en el consentimiento.

- ✓ COLPENSIONES:

Por otra parte, la apoderada de COLPENSIONES solicita se revoque parcialmente la sentencia de primera instancia en su numeral segundo en cuanto a las cuotas de administración, y en su lugar, se ordene a PROTECCIÓN S.A. retornar a COLPENSIONES la totalidad de los valores recibidos por concepto de aportes, frutos, rendimientos financieros y bonos pensionales que se encuentran en la cuenta de ahorro individual, sin descontar valor alguno por cuotas de administración, comisiones y aportes al fondo de garantía de pensión mínima, toda vez que el efecto de la declaratoria de ineficacia es retrotraer las cosas al estado en que se hallarían si no se hubiese existido el acto jurídico.

- **DECRETO 806 DE 2020:**

Atendiendo a lo establecido en el Decreto 806 del 4 de junio de 2020 *“Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”*, artículo 15, la sentencia se profiere escrita.

CONSIDERACIONES

Los problemas jurídicos a resolver de conformidad con el recurso interpuesto y en grado jurisdiccional de consulta en favor de COLPENSIONES, será *i)* determinar si el acto jurídico de afiliación de la señora BEATRIZ HELENA OLARTE MEJÍA a PROTECCIÓN S.A., fue válido, o si por el contrario es ineficaz; *ii)* consecuentemente si procede la declaratoria de la ineficacia, se deberá analizar los conceptos a devolver por el fondo privado y lo referente al bono pensional; *iii)* Y, la operancia o no de la excepción de prescripción de la acción.

i. Acto jurídico de la afiliación y precedente jurisprudencial en materia de traslado de régimen pensional:

Para comenzar, esta Sala pasará hacer un recuento breve de la jurisprudencia de esa alta Corporación de Justicia, que estructura el tema.

Advierte la Corte que el traslado de régimen debe estar precedido de toda información relevante para la toma de la decisión. Que es necesario que el fondo de pensiones proporcione a quien pretenda captar como su afiliado, una información suficiente, completa y clara sobre las reales implicaciones que le conllevaría dejar el anterior régimen y sus posibles consecuencias futuras. Que la figura de la ineficacia es una consecuencia prevista en el literal b del artículo 13 de la ley 100 de 1993 para aquellos casos en que el fondo de pensiones omitió suministrar información que permitiera la selección de régimen de forma libre y voluntaria, acto indebido de esta, que tiene como consecuencia no producir sus efectos propios. Que el estatuto Financiero de la época en los artículos 97 y siguientes consagró que las administradoras debían obrar no solo conforme a la ley, sino soportadas en los principios que orientan la buena fe en las que se sancionaba la falta de información relevante.

Más adelante la Corte Suprema de Justicia precisó que son deberes de las administradoras de pensiones, lo siguientes:

- (i) Brindar información en todas las etapas del proceso de afiliación, desde la antesala hasta la determinación de las condiciones para el disfrute pensional.
- (ii) La información debe ser completa y comprensible. Y,

- (iii) La información debe proporcionarse con prudencia, teniendo obligación de buen consejo, que puede llevar incluso a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente le perjudica.

Si bien los precedentes judiciales tenidos en cuenta por esta Sala corresponden a afiliados beneficiarios del régimen de transición, las razones que sustentan la ineficacia del traslado no tienen en cuenta esa circunstancia, pues el hecho determinante es la falta de información al afiliado.

Así las cosas, lo dicho anteriormente constituye sustento que permite deducir las siguientes reglas:

- (i) Las administradoras de pensiones tienen a su cargo la obligación de información de conformidad con lo establecido en el literal b del artículo 13 de la Ley 100 de 1993.
- (ii) La información del traslado de régimen debe ser de transparencia máxima, detallada y documentada acerca de la incidencia que pueda tener frente a sus derechos prestacionales, de modo que no basta con explicar solo los beneficios que dispense el régimen al que pretende trasladarse, sino además el monto de la pensión que en cada uno de ellos proyecte la diferencia en el pago de los aportes que allí se realizarían, las implicaciones y la conveniencia o no de la eventual decisión y obviamente la declaración de aceptación de esa situación. Y,
- (iii) La carga de la prueba de demostrar que se informó de forma detallada, clara y documentada recae en la administradora de fondos de pensiones.

De igual forma, la Corte Suprema de Justicia fijó unos grados de exigencia de la información, dependiendo de las normas vigentes para la fecha en que se efectúe el vínculo a las administradoras de pensiones, estableciendo en lo temporal los siguientes momentos:

- (i) Desde la fundación de las AFP.
- (ii) Desde la expedición de la Ley 1328 de 2009 y el Decreto 2241 de 2010 incorporado en el Decreto 2555 de 2010.
- (iii) Y, a partir de la vigencia de la Ley 1748 de 2014, Decreto 2071 de 2015. y en la circular 16 de 2016, la cual entrega instrucciones generales para la remisión de información financiera para efectos de inspección, vigilancia y control.

La determinación a tomar, tiene como soporte en la línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia en las sentencias 31314 y 31989 de 2008; 33083 de 2011; 12136 y 46292 de 2014; SL9519 de 2015; 47125, SL19447 y SL17595 de 2017; SL3496 y SL4989 de 2018; SL1421, SL1452, SL1688, SL4360 y SL4426 de 2019; STL 3716, STL4001, STL4084, SL2611 y SL2877 de 2020.

En el caso objeto de estudio, sobre los pormenores que rodearon la afiliación, del interrogatorio de parte se desprende que la demandante se afilió al RAIS en el año 1994, debido a que el asesor de PROTECCIÓN S.A. le indicó que el ISS se iba a acabar y no tenía más opciones que trasladarse al RAIS. Indicó que dicho asesor no le habló sobre el derecho de retracto que esta tenía antes de cumplir los 47 años de edad. Y que su principal razón para retornar al RPM es que su pensión en el RAIS está sobre el 46% de lo que actualmente devenga.

Pues bien, sobre la carga de la prueba es importante hacer la remisión a la sentencia SL4426-2019, donde la Corte expone los motivos por los cuales las administradoras deben demostrar que suministraron una información clara y transparente, lo que se explica desde la premisa que el afiliado presenta una afirmación indeterminada *-la de que no recibió información-* y es el fondo a quien corresponde demostrar que cumplió con sus deberes en esa materia, aspecto en el que por demás está en una mejor posición de ilustrar por cuanto debe conservar en sus archivos la documentación que soporta el traslado. Así mismo, contrastando toda la jurisprudencia citada, debe decirse que la carga de la prueba recae en la administradora, puesto que, como entidad

especializada, cuenta con los conocimientos para que a través de sus asesores hagan conocer a los afiliados que pretende captar los pormenores de sus situaciones pensionales y las consecuencias que trae elegir el Régimen al que le proponen afiliarse.

Se tiene que las afirmaciones realizadas por la demandante no fueron desvirtuadas procesalmente por PROTECCIÓN S.A., toda vez que, pese a que la entidad administradora anexó el documento visible de folio 141 del expediente, esto es, el formulario de afiliación, mismo que fue suscrito por la actora, lo cual permite pensar en un principio que si existió una asesoría acerca de cuáles serían los efectos positivos o adversos de trasladarse de un régimen pensional a otro, lo cierto es que este documento no es prueba suficiente para determinar que efectivamente a la accionante se le haya brindado una completa asesoría, acerca de cuáles serían los efectos positivos o adversos de trasladarse de un régimen pensional a otro.

Debe repetirse que la labor de los asesores de los fondos privados, en la etapa pre-negocial, anterior a la materialización del consentimiento, consistía en brindar una información transparente, completa, detallada y comprensible, puesto que, lo que se revisa es si la administradora de fondos de pensiones que pretendía captar a la demandante como su afiliada cumplió con los imperativos profesionales de información.

Vale la pena manifestar que, por el hecho de que la demandante firmara el formulario de vinculación, donde se hace constar que la escogencia del régimen de ahorro individual se efectúa de forma “libre, espontánea y sin presiones”, no implica que conociera las consecuencias que implicaba el cambio de régimen pensional.

También es importante advertir, que, si bien la mayoría de los precedentes judiciales tenidos en cuenta por esta Sala corresponden a afiliados beneficiarios del régimen de transición, las razones que sustentan la ineficacia del traslado no tienen en cuenta esta circunstancia, pues el hecho determinante es la falta de información al afiliado.

Con respecto a la información que se le debía brindar a la demandante para la fecha de traslado, en las providencias SL1688-2019, SL4360-2019 y SL4426-

2019, el Alto Tribunal fijó unos grados de exigencia de la información, dependiendo de las normas vigentes para la fecha en que se efectúe el vínculo, estableciendo en lo temporal los siguientes momentos: primer periodo, desde la fundación de las AFP; segundo momento, desde la expedición de la Ley 1328 de 2009 y el Decreto 2241 de 2010; y tercer momento, a partir de la vigencia de la Ley 1748 de 2014 y el Decreto 2071 de 2015.

En el caso sometido a estudio, el traslado al RAIS de la actora fue el 14 de diciembre de 1994, lo que se corresponde con el primer momento, ciclo para el cual según lo expresado en la sentencia SL-1452-2019, la obligación de la administradora privada demandada era la de brindar una información necesaria y transparente.

Se tiene entonces, que PROTECCIÓN S.A. no cumplió con la carga de probar el haber realizado en la etapa previa a la suscripción del formulario de afiliación, una asesoría lo suficientemente clara, detallada y concreta en relación con su situación particular, por tanto, debe concluirse que es desde allí que el traslado resulta ineficaz, generando como consecuencia que la afiliación válida es la efectuada al régimen de prima media, debiéndose en consecuencia **CONFIRMAR** la providencia de primera instancia, en tal sentido.

ii. Efectos de la ineficacia y conceptos a devolver por el fondo privado:

Ahora bien, respecto a los motivos de inconformidad expuestos en la apelación de COLPENSIONES, con relación a los **VALORES A DEVOLVER POR EL FONDO PRIVADO**, la jurisprudencia ha indicado que debe darse aplicación al artículo 1746 del Código Civil que gobierna las restituciones mutuas en el régimen de nulidades, con la necesaria precisión de que al tratarse de un tema pensional, el juez del trabajo debe aplicar soluciones que compensen de manera satisfactoria el perjuicio que fue ocasionado a un afiliado por el cambio injusto de régimen pensional y ello implica que la AFP que dio lugar a ello traslade a COLPENSIONES: (i) la totalidad del capital ahorrado, (ii) los rendimientos financieros obtenidos y (iii) los gastos de administración y comisiones con cargo a sus propias utilidades, pues desde el nacimiento del acto ineficaz, estos recursos debieron ingresar al régimen de prima media con prestación definida administrado por COLPENSIONES.

De igual forma, también debe sumarse que no puede verse afectada la sostenibilidad financiera del régimen de prima media con prestación definida, pues debe garantizarse que COLPENSIONES reciba una suma equivalente a la que hubiese generado con rendimientos financieros, en caso de que la demandante no se hubiese trasladado, y es claro que de acuerdo con la forma como se distribuyen las cotizaciones en el RAIS, parte de ellas se imputaron a gastos de administración, compañías aseguradoras y el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, sumas que como se dijo no puede ser inferior al monto total del aporte legal correspondiente en caso de que la demandante hubiere permanecido bajo la administración de COLPENSIONES.

Pues bien, conforme a la apelación de COLPENSIONES, debe precisarse que si bien el juez de primera instancia no ordenó la devolución de los gastos, hay que anotar que la ineficacia es una respuesta jurídica a la transgresión de un deber legal y ello implica, que el acto jurídico declarado ineficaz carezca de vida jurídica, y, por tanto no produzca ningún efecto, lo cual fue precisado por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la Sentencia SL-4360 de 2019, en la que indicó que *“la sanción impuesta en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993 consagra una ineficacia en sentido estricto, lo que conlleva que la consecuencia allí contenida es la exclusión de todo efecto al traslado.”*

Por lo anterior, conforme a la orden dada a PROTECCIÓN S.A., hay lugar también a que sean trasladadas las **cuotas de administración**, debidamente indexados, con cargo a sus propios recursos, debiéndose en este sentido, **REVOCAR** la sentencia, para en su lugar, **ORDENARLE** a PROTECCIÓN S.A. realizar la devolución de este concepto a COLPENSIONES.

Además, si bien el juez le ordenó a PROTECCIÓN S.A. devolver lo correspondiente a los **seguros previsionales**, este concepto debe ser debidamente indexado, con cargos a sus propios recursos, y lo destinado a la **garantía de pensión mínima**, conforme lo dispone el artículo 7 del Decreto 3995 de 2008 compilado en el DUR 1833 de 2016, debiéndose en este sentido, **ADICIONAR** la sentencia, para en su lugar **ORDENARLE** a PROTECCIÓN S.A. incluir en los valores por entregar a **COLPENSIONES**, estos conceptos.

En lo que respecta a la orden dada por el juez de la devolución del **BONO PENSIONAL** a COLPENSIONES, conforme lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley 100 de 1993, los bonos pensionales constituyen un aporte para conformar el capital que requieren los afiliados del Sistema General de Pensiones para financiar la pensión.

Los bonos tienen varias clasificaciones; importando para el caso que se resuelve el tipo A, que corresponden al afiliado que se traslada del régimen de prima media al régimen de ahorro individual.

Este mecanismo de financiación de la pensión antes de su pago debe surtir varias etapas entre las que se encuentran la emisión, expedición, redención y pago, en el caso estudiado, el bono pensional se redimió el 31 de octubre de 2025, cuando la actora cumplió 60 años de edad, y dado que, en la actualidad se desconoce si este ha sido recibido por PROTECCIÓN S.A., lo procedente no es su traslado a COLPENSIONES, sino la restitución del bono a la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para que esta entidad proceda con su anulación, por lo que en este aspecto se **REVOCARÁ** la sentencia de primera instancia.

iii. Excepción de prescripción de la acción.

En lo que tiene que ver con la excepción de **PRESCRIPCIÓN**, la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL-1688 de 2019, ha señalado que la prosperidad de la ineficacia es el resultado del incumplimiento de un elemento estructural del negocio, por lo que, al no haber producido efectos, el solo transcurso del tiempo no tiene la virtualidad de integrar los elementos omitidos, postura que comparte esta Sala por lo que debe decirse que no está llamada a prosperar.

Con los argumentos anteriores y atendiendo al principio de consonancia de que trata el artículo 66A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el artículo 35 de la Ley 712 de 2001, esta Sala hizo un pronunciamiento implícito de las alegaciones presentadas.

Así las cosas, se **ADICIONARÁ, REVOCARÁ y CONFIRMARÁ** la sentencia revisada por vía de apelación y en grado jurisdiccional de consulta.

Las costas procesales de la primera instancia como lo dijo el juez. En esta instancia no se causaron.

Por lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

RESUELVE:

PRIMERO: Se **CONFIRMA** la sentencia de primera instancia en lo que tiene que ver con la declaración de la ineficacia de la afiliación al régimen de ahorro individual con solidaridad administrado por **PROTECCIÓN S.A.**

SEGUNDO: Se **REVOCA** la sentencia, en lo correspondiente a la absolución de las cuotas de administración, y en su lugar, **ORDENAR** a **PROTECCIÓN S.A.** devolver este concepto, debidamente indexado, con cargo a sus propios recursos, a **COLPENSIONES**.

TERCERO: Se **ADICIONA** la sentencia, en cuanto a los conceptos a devolver al fondo público, y en su lugar, se le **ORDENA** a **PROTECCIÓN S.A.** trasladar lo correspondiente a los seguros provisionales, debidamente indexados, con cargo a sus propios recursos, y lo destinado al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, conforme lo dispone el artículo 7 del Decreto 3995 de 2008 compilado en el DUR 1833 de 2016.

CUARTO: Se **REVOCA** la orden dada a **PROTECCIÓN S.A.** respecto a la devolución del bono pensional, conforme se dijo en la parte motiva de esta providencia.

QUINTO: En lo demás se **CONFIRMA** la sentencia.

SEXTO: Costas procesales como se dejó dicho en la parte motiva de esta providencia.

Se notifica lo resuelto por **ESTADOS**. De no ser susceptible del recurso extraordinario de casación se ordena devolver el expediente al juzgado de origen.

Los Magistrados,



GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ



CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA



HUGO ALEXÁNDER BEDOYA DÍAZ

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE MEDELLÍN - SALA LABORAL - HACE CONSTAR

Que la presente providencia se notificó por
estados N° 073 del 30 de abril de 2021

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>